Señor

JUEZ CUARENTA Y UNO CIVIL DE CIRCUITO DE BOGOTÁ

E. S. D.

REF.: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE MAYOR CUANTÍA

DEMANDANTE: MEDIA CONSULTING GROUP S.A.S.

DEMANDADO: ASESORES LOPEZ S.A.S.

RAD.: 2020-00306

LUIS CARLOS FIGUEROA SAITO, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, abogado inscrito en el certificado de existencia y representación legal de la firma **AVOCAT LEX S.A.S.**, sociedad legalmente constituida ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, identificada con NIT número 900.903.783-9, cuyo objeto social principal es la prestación de servicios jurídicos o actividades jurídicas (CIIU 6910), representada legalmente por **MALORY MEJÍA COLL**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía número 1.045.692.319, muy comedidamente me dirijo a usted para manifestarle que mediante este escrito presento **EXCEPCIONES DE MÉRITO** en el proceso de la referencia todo lo cual hago basado en las siguientes

CONSIDERACIONES FÁCTICAS Y JURÍDICAS

- **Oportunidad procesal**

Desde el mes de Julio del año 2021 aporté poder solicitando vía correo electrónico al juzgado que me otorgara acceso al expediente digital del proceso para ejercer el derecho de defensa de mi poderdante. El día 2 de agosto de 2021 mediante auto notificado por estado en fecha agosto 3 de 2021 el despacho resolvió tenerme por notificado y otorgó el plazo de 3 días para acceso al expediente digital. Solo hasta el día 9 de agosto de 2021 a la 2:54 p.m. el despacho otorgó al suscrito acceso al expediente y el día 11 de agosto de 2021 se presentó recurso de reposición contra el mandamiento de pago atacando los requisitos del título valor, es decir, que el recurso de reposición se presentó a los dos días del juzgado haber otorgado acceso al expediente al suscrito lo cual en los términos del art. 118 del C. G. del P. Interrumpió el término de para contestar la demanda y presentar excepciones de mérito.

De lo anterior se evidencia que del término de contestación de la demanda dada la fecha de presentación del recurso de reposición contra el mandamiento de pago solo transcurrieron dos días, no obstante, es necesario tener en cuenta el art. 118 del Código General del Proceso que en su inciso 4 dispone “*Cuando se interpongan recursos contra la providencia que concede el término, o del auto a partir de cuya notificación debe correr un término por ministerio de la ley, este se **interrumpirá y comenzará a correr** a partir del día siguiente al de la notificación del auto que resuelva el recurso.*”, todo lo cual significa que en virtud del fenómeno de la interrupción el término se computa nuevamente de manera íntegra es decir, reitero, comienza a computarse en su totalidad, desde cero. Así además lo han sostenido las diferente Altas Cortes.

Es así como en atención al art. 118 del C. G. del P. que se cita, al operar en estos casos el fenómeno de la interrupción el término para contestar la demanda y proponer excepciones de mérito, según el art. 442 del C. G del P. que es de diez (10) días y se empieza a correr desde el principio o íntegramente, para el caso concreto inició el día 11 de febrero de 2022, ya que el auto que resolvió el recurso fue notificado por estado el día 10 de febrero, y vence el día 24 de febrero de 2022.

- **En cuanto a los hechos.**

1. No es cierto. La sociedad demandada no adeuda la suma descrita en este hecho ya que entre la sociedad demandante y la sociedad demandada no ha existido en ningún momento contrato, así como que la sociedad demandante en ningún momento ha prestado el servicio que narra en los hechos de la demanda.
2. No es cierto. Como se manifestó en el recurso de reposición interpuesto contra el mandamiento de pago, los documentos que se aportan en la demanda y que pretenden pasar por una factura no cumple con sus requisitos

y particularmente al respecto de la constancia de aceptación tácita no fue firmada por quien debía firmarla en ese momento que era exclusivamente la representante legal principal de quien no se ha probado hasta la fecha que estuviera ausente, así como tampoco se ha probado que el representante legal suplente tuviese como facultad expresa la de firmar este tipo de documentos.

3. No es cierto. Se reitera que la demanda presentada está basada en un documento denominado factura de venta que describe un servicio que nunca se prestó porque dicho contrato no existió; seremos reiterativos hasta la saciedad en afirmar que el servicio denominado como “publicidad exterior” no se prestó a la sociedad demandada. Es mucho menos cierto que haya prestado el inexistente servicio en los términos del contrato por que entre las partes no existió tal contrato; no existe entre las partes y a favor del demandante algún tipo de orden de compra o similar ni constancia de la prestación y recibido a satisfacción de los servicios que dice haber prestado.
4. No es cierto. La sociedad demandada no adeuda la suma descrita en este hecho ya que entre la sociedad demandante y la sociedad demandada no ha existido en ningún momento contrato, así como que la sociedad demandante en ningún momento ha prestado el servicio que narra en los hechos de la demanda.
5. No es cierto. Como se manifestó en el recurso de reposición interpuesto contra el mandamiento de pago, los documentos que se aportan en la demanda y que pretenden pasar por una factura no cumple con sus requisitos y particularmente al respecto de la constancia de aceptación tácita no fue firmada por quien debía firmarla en ese momento que era exclusivamente la representante legal principal de quien no se ha probado hasta la fecha que estuviera ausente, así como tampoco se ha probado que el representante legal suplente tuviese como facultad expresa la de firmar este tipo de documentos.
6. No es cierto. Se reitera que la demanda presentada está basada en un documento denominado factura de venta que describe un servicio que nunca se prestó porque dicho contrato no existió; seremos reiterativos hasta la saciedad en afirmar que el servicio denominado como “publicidad exterior” no se prestó a la sociedad demandada. Es mucho menos cierto que haya prestado el inexistente servicio en los términos del contrato por que entre las partes no existió tal contrato; no existe entre las partes y a favor del demandante algún tipo de orden de compra o similar ni constancia de la prestación y recibido a satisfacción de los servicios que dice haber prestado.
7. No es cierto. La sociedad demandada y su grupo de trabajo han sido instigados, perseguidos y presionados basados en documentos que no tienen ninguna legitimación ni soporte contractual, todo lo anterior por la sociedad demandante y, en particular, por el Sr. Marlon Díaz Marín quien se presenta ante su despacho como representante legal suplente. Esta persecución se ha dado a tal punto que sin tener ningún derecho sobre los bienes de mi representada el Sr. Díaz Marín se presentó en unos de los bienes de propiedad del demandado afirmando ser dueño lo cual se dejó constar en correo dirigido a su abogada. Tampoco es cierto lo referente a los acercamientos con la parte demandante que afirma la abogada en su demanda, ya que estos se dieron con posterioridad a la presentación de la demanda y por iniciativa de la sociedad que represento los transcurrieron entre los meses de enero a junio de 2021 aproximadamente.
8. No es cierto. Esto no es un hecho es una apreciación jurídica del demandante y/o su apoderado.
9. No es cierto. Como se advirtió a través del recurso de reposición interpuesto contra el mandamiento de pago los documentos que se presentan como prueba a este proceso adolecen de los requisitos para ser considerados títulos valores. Como lo advierte el inc. 2 del art. 430 del C.G. del P. nos encontramos en la oportunidad procesal, por haber presentado el recurso de reposición indicando los requisitos de que adolece el título valor, para reiterar que en este caso no se trata de títulos valores y para atacar la existencia del vínculo contractual que la demandante alega y afirmamos y probaremos que no existió jamás.

- **En cuanto a las pretensiones.**

En calidad de apoderado de la demandada nos oponemos a todas y cada una de las pretensiones de la demanda principal por lo cual proponemos las siguientes

EXCEPCIONES DE MÉRITO

1. **INEXISTENCIA DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS.**

El art. 772 del código de comercio advierte que “**no podrá librarse factura alguna que no corresponda** a bienes entregados real y materialmente o **a servicios efectivamente prestados** en virtud de un contrato verbal o escrito”.

Por su parte, el art. 620 del Código de comercio hace la primera referencia al carácter de accesorio que tiene los títulos valores respecto del contrato o negocio subyacente o que le da origen al documento o título valor al afirmar que “la omisión de tales (...) requisitos no afecta el negocio jurídico que dio origen al documento o al acto” (parte pertinente); a contrario sensu (como método interpretativo válido de la norma jurídica) lo que expresa esta norma que si el negocio jurídico no existe entonces tampoco existe el título valor y mucho menos la factura teniendo en consideración el art. 772 citado.

Tenemos pues que la factura (como elemento accesorio) seguirá la suerte de lo principal (que para el caso concreto es el contrato), de manera que si el contrato no existe el título valor tampoco.

Cuando en la demanda la sociedad demandante a través de su apoderado afirma que se prestó el servicio de publicidad de conformidad con los “*términos contratados*” está haciendo una afirmación falaz a través de la cual induce en error al despacho y que es constitutivo de fraude procesal; ya lo he advertido en memoriales anteriores en el sentido que el poder judicial no puede ser cómplice de estas conductas.

2. INEXISTENCIA DE CONTRATO VERBAL O ESCRITO.

De conformidad con el art. 1502 y siguientes del código civil, son requisitos para la validez del contrato la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa lícitos. Por su parte, el art. 1500 del código civil sostiene que el contrato puede ser real consensual y solemne de acuerdo al tipo de perfeccionamiento de cada contrato.

Luego, podemos abstraer de las disposiciones anteriores que un contrato consensual, el cual se perfecciona con el solo acuerdo entre las partes, puede comulgar con un contrato verbal y siguiendo esa lógica para que exista contrato debe haber consentimiento, es decir, manifestación de voluntad lo cual no ocurre en el caso que se analiza. Así, cuando el consentimiento está viciado la sanción es la nulidad, ahora bien cuando se carece de consentimiento, como requisito de validez del contrato, el contrato es *inexistente*.

Hacer referencia a una excepción de mérito como esta es indispensable dado lo dispuesto por el art. 784 del código de comercio que dispone que contra la acción cambiaria sólo podrán oponerse las siguientes excepciones: (...) “12) **las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación (...) del título, contra el demandante que haya sido parte del respectivo negocio** (...)” (parte pertinente).

De manera que es indispensable en un proceso ejecutivo derivado de una acción cambiaria se revisen las condiciones contractuales que le dieron origen a los documentos aportados al proceso y que son aducidos como títulos valores por el demandante. Lo ha sostenido la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia al afirmar que

*“Al examinar y confrontar la situación planteada por el recurrente, con los elementos de juicio que obran en el plenario, se deduce que el fallo impugnado no adolece del “vicio procesal de incongruencia”, **porque al corresponder la ejecución al ejercicio de la “acción cambiaria” derivada de un pagaré otorgado por el demandado a favor del actor, de conformidad con el numeral 12 del precepto 784 del Estatuto Mercantil, procedía plantear “excepciones derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación (...) del título, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio (...)”**, supuesto este que puede abarcar múltiples hipótesis, verbi gratia, relacionadas con la inexistencia, o ineficacia del contrato, nulidad absoluta o relativa, simulación, incumplimiento de obligaciones, etc.” (Ref.: Exp. 11001-0203-000-2011-00415-00).*

3. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN.

Por definición **obligación** es el vínculo jurídico que existe entre un acreedor y un deudor que faculta al acreedor a exigir del deudor el cumplimiento de una prestación. Para que exista obligación esta debe tener origen en alguna de sus fuentes las cuales para el derecho civil vigente son (i) contrato, (ii) cuasicontrato, (iii) delito, (iv) cuasidelito y (v) ley.

Observemos que dentro de las fuentes de obligaciones no se encuentra la factura, lo cual ratifica lo expuesto en líneas anteriores respecto de la relación de accesoriedad que existe de la factura hacia el contrato. Dicho eso, entonces, la fuente de obligación advertida por el demandante en su demanda es el contrato cuando en los hechos afirma haber prestado el servicio de publicidad exterior en los “*términos contratados*”, es decir, el demandante reconoce la accesoriedad existente entre la factura y el contrato siendo aquella lo accesorio y el contrato lo principal; sin embargo, la demandante en ningún momento se detiene a demostrar la existencia del mismo, razón por la cual podríamos encontrarnos frente a la hipótesis de un título valor complejo y no simple ya que existe una imperiosa carga de la prueba de la existencia del contrato en cabeza del demandante.

Así las cosas, si lo que alega la demandante es una obligación clara, expresa y actualmente exigible, tal obligación debe tener una fuente y no está en discusión que esa fuente sería el contrato luego como se demostrará en este caso el contrato no existió, no hubo prestación del servicio y consecuencia la obligación pretendida por el demandante no existe.

4. AUSENCIA DE REQUISITOS DE VALIDEZ DEL CONTRATO.

Volviendo parcialmente a lo planteado en la excepción segunda propuesta en este documento, el art. 1502 y siguientes del código civil hacen referencia a los que son requisitos para la validez del contrato y menciona (i) la capacidad, (ii) el consentimiento, (iii) el objeto y (iv) la causa lícitos.

La ecuación que se deriva de lo dispuesto en nuestro estatuto civil vigentes es la siguiente:

Al analizar la eficacia del contrato se debe tener en cuenta que

- Si el contrato en su inicio carece de uno o alguno de los requisitos de validez, entonces el contrato es inexistente.

Carencia de requisitos de validez del contrato	=	Contrato inexistente
--	---	----------------------

- Si el contrato al momento de su perfeccionamiento uno o alguno de sus requisitos adolece de algún vicio, entonces el contrato es nulo.

Vicios en los requisitos de validez del contrato	=	Contrato nulo
--	---	---------------

En el caso que se examina nos enfrentamos a un contrato inexistente dado que no se consolidaron ninguno de los requisitos de validez del contrato porque ni siquiera existió acercamiento entre las partes para considerar la existencia de una fase precontractual configurándose así una falsedad ideológica en el documento presentado como prueba por el demandante al proceso de la cual hablaremos más adelante.

5. COBRO DE LO NO DEBIDO E INEXISTENCIA DEL DERECHO DE CRÉDITO DEL DEMANDANTE

El derecho crédito legitima a quien se considera acreedor para activar el denominado derecho de persecución el cual permite perseguir el patrimonio del deudor y exigirle el pago de la obligación. Lo que no se dice habitualmente sobre el derecho de crédito es que quien se considera acreedor en muchas oportunidades se extralimita en las facultades que este derecho aparentemente le otorga constituyéndose su actuar en un abuso del derecho, asunto particular sobre el cual se ha pronunciado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia al sostener que “*la teoría del “abuso del derecho”, que, en esencia, asigna a aquel que ejerce sus propios derechos en forma desbordada o desviada respecto de la finalidad que el ordenamiento jurídico reconoce para ellos teniendo presentes los principios y valores que los inspiran, el deber de*

reparar los daños que con su comportamiento hubiese causado, tesis que en Colombia, luego de haber sido expuesta y aplicada durante muchos años por esta Corporación, fue recogida en el artículo 830 del Código de Comercio, que a la letra reza: “El que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause”, y tuvo posterior consagración constitucional, como quiera que la Carta Política de 1991, en su artículo 95, establece que “[s]on deberes de la persona y del ciudadano: (...). 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. (...)”.

Como su nombre lo indica, la excepción de mérito del cobro de lo no debido está estrechamente relacionada con todas las anteriores. Si no hay contrato, no hay factura, no hay obligación, no hay derecho de crédito y el demandante está cobrando lo que no se le debe y en base a un servicio que nunca prestó.

6. ABUSO DEL DERECHO A LITIGAR

Al respecto de esta figura procesal la Sala Civil de la Corte también se ha pronunciado ampliamente y ha sostenido lo siguiente:

“La jurisprudencia ha identificado diversas situaciones constitutivas del abuso del derecho a litigar o de las vías legales, entre ellas, interposición de una acción temeraria basada en el albur del proceso y sin consideración al derecho en discusión (CSJ. SC. 30 oct. 1935), CSJ SC 10 may. 1941. G.J. LI, pág. 283 a 291 y CSJ SC, 28 sep. 1953, entre otras); la formulación de una denuncia penal sin fundamento (CSJ SC. 21 nov. 1969 G.J. CXXXII, pág. 156-180); el desistimiento de un proceso inesperadamente para evitar un inminente fallo adverso que diere la victoria a la contraparte (ídem); y la promoción de un compulsivo sin fundamento ni respaldo (CSJ SC, 15 dic. 2009, rad. 2006-00161-01).”

Luego continúa afirmando que:

“(...) El uso anormal, malintencionado, imprudente, inconducente o excesivo en relación con la finalidad que legítimamente ofrecen esas leyes rituarías para el reconocimiento, efectividad o defensa de un derecho, degenera en abuso del derecho a litigar y en cada caso particular el juez puede juzgar que constituyen un caso de culpa civil.”

Nada más acertado y congruente con lo que está ocurriendo en este proceso en el demandante desde el momento el que promovió este proceso judicial tenía conocimiento de la inexistencia del contrato y la ausencia de prestación de servicio alguno, aspecto sobre el juez no puede negar la mirada ni dejar pasar por alto y deberá tomar las medidas correctivas como director del proceso y juez instructor. Como se demostrará en este proceso es de pleno conocimiento del demandante que este no prestó ningún servicio porque sencillamente entre las partes no hubo ningún tipo de contrato.

7. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA

Esta excepción presupone que quien presenta la demanda tiene la legitimación jurídica desde lo sustancial y procesal para impetrar la acción que promueve. Ante la evidente ausencia de un contrato y la carencia de la prestación del servicio carece la demandante de legitimación para presentar esta demanda ya que no tiene una fuente jurídica válida de la cual se deriven las obligaciones que pretende cobrar.

El art. 278 del C. G. del P. dispone que se podrá dictar sentencia anticipada cuando se encuentre probada la (...) carencia de legitimación en la causa por lo que solicitamos al juez se sirva, en el caso concreto, dictar sentencia anticipada declarando probada la excepción de falta de legitimación en la causa.

8. FALSEDAD IDEOLÓGICA DEL DOCUMENTO.

Sobre el particular la H. Corte Suprema de Justicia – Sala Civil al pronunciarse sobre una solicitud de exequátur de referencia 11001-0203-000-2007-01956-00 sostuvo:

*“Para precisar el contenido y los alcances de la **“falsedad documental”**, con apoyo en la literatura jurídica se puede señalar que la misma se manifiesta esencialmente **bajo dos modalidades: material e ideológica o intelectual.** Aquella*

tiene ocurrencia cuando se altera físicamente el documento, mediante supresiones, cambios, o adiciones del texto, o por suplantación de firmas, valiéndose, por ejemplo, de borrado químico o mecánico, o haciendo enmendaduras; mientras que **la segunda se caracteriza porque al consignarse el texto del instrumento se tergiversan las ideas o se consignan unas distintas a las provenientes de la intencionalidad del o los autores del mismo.**

Por su parte, la Sala Penal de la misma corporación mediante sentencia SP3424 de 2021 ha afirmado que:

“i) El Delito de Falsedad en documento privado

El delito de falsedad en documento privado se encuentra contenido en el artículo 289 del Código penal, cuyo tenor literal establece:

“El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses.”

El delito así descrito es de aquellos denominados de peligro, en cuanto no se exige la producción de un daño, en el entendido que el comportamiento falsario pone en riesgo el bien jurídicamente tutelado, es decir, la fe pública, traducida en la confianza de la colectividad en el tráfico jurídico de los documentos privados.

Este tipo penal regula o reprime tanto la carencia de autenticidad, como la de veracidad de los documentos, así lo reconoció la Corte Constitucional al determinar su exequibilidad en la sentencia C-637-2009, para lo cual recordó los postulados desarrollados por esta Sala, contenidos entre otras, en SP1704-2019 radicación N° 52700, que reiteró lo expuesto el 29 de noviembre de 2000, radicación 13231, decisión en la que a su vez se aludió a la casación de 18 de abril de 1985, pues allí se estableció que la exigencia de veracidad para los particulares respecto a los documentos privados es exigible cuando: i) el deber proviene de la ley; ii) el documento tiene capacidad probatoria; iii) el documento es utilizado con fines jurídicos y; iv) el documento determine la extinción o modificación de una relación jurídica sustancial con perjuicio de un tercero.

*De esta forma, **la Corporación ha sostenido la existencia de dos connotaciones para este delito**, la primera producto de su alteración material, “como puede ocurrir cuando alguien enmienda, tacha, borra, suprime o de cualquier manera altera su texto”, y **la segunda, la falsedad ideológica que se configura cuando, “el particular consigna en el documento privado hechos o circunstancias ajenas a la realidad, es decir, cuando falta a su deber de verdad sobre un aspecto que comporta quebrantamiento de relaciones sociales con efectos jurídicos.”***

En el caso concreto, la demandante ha faltado a su deber de verdad consignando hechos ajenos a la realidad que inclusive se extienden a la demanda misma en la cual afirma haber prestado los servicios en los “términos contratados” cuando en realidad el servicio de “publicidad exterior” nunca se prestó.

9. INEXISTENCIA DE ORDEN DE COMPRA O DOCUMENTO EQUIVALENTE A FAVOR DE LA DEMANDANTE.

En el ítem 34 del cuaderno principal del expediente que registra en el juzgado aparece un documento identificado como “34certificación” que es una certificación aparentemente expedida por el Sr. Juan Carlos López Cardona en calidad de Representante Legal de la sociedad Central Regional de Medios S.A.S. que nada tiene que ver en este proceso. En efecto, para conocimiento del despacho, existe una demanda del demandante en este proceso contra la sociedad Central Regional de Medios S.A.S. y que se basa en circunstancias similares a las que se debaten ante su despacho; sin embargo, nada tiene que ver esa sociedad con este proceso.

Nos preguntamos ¿Qué pretende probar el demandante con esta certificación? Distinto a lo que pretenda probar la demandante, lo que se evidencia en este caso es que en las relaciones con la sociedad Central Regional de Medios S.A.S. la actual demandante tiene siempre la condición de deudora, no de acreedora y si en algún momento existió alguna relación de ese tipo con la actual demandada Asesores López S.A.S. esa relación se dio bajo el mismo parámetro, es decir, que la sociedad demandante siempre ha tenido la calidad de deudora y no de acreedora como pretende mostrarlo al despacho.

En algún momento, la sociedad demandante en este proceso, así como la sociedad Central Regional de Medios S.A.S. tuvieron como representante legal al señor Juan Carlos López Cardona (q.e.p.d.) por lo que si el demandante lo que pretende es traer esa circunstancia tratando de probar que la sociedad demandada le contrató un servicio, pues resulta ser todo lo opuesto. La certificación que aporte es clara al advertir que *“la agencia (Media Consulting) (...) ha tenido buen comportamiento en el manejo del cupo de crédito otorgado (...)”*, esto lo que significa es que sociedad Central Regional de Medios S.A.S. era quien prestaba un servicio a la hoy demandante más el servicio no lo prestaba la demandante. Por esto se afirma reiterativamente que la hoy demandante nunca prestó el servicio al que hace referencia en su demanda.

En consonancia con lo anterior, se demostrará en este proceso que mi representada jamás solicitó la prestación de un servicio a la demandante; se demostrará que es la demandante, a propósito de la certificación que presenta, quien siempre presentó órdenes de compra a la sociedad Central Regional de Medios S.A.S. para que le prestar el servicio luego esta siempre tenía la condición de deudora. Los hábitos y costumbres comerciales entre la demandante y la sociedad Central Regional de Medios S.A.S. corresponden a que la demandante en este proceso siempre ha tenido la calidad de deudora frente a Central Regional de Medios S.A.S.

10. CARENCIA DE LOS REQUISITOS FORMALES Y SUSTANCIALES DEL TÍTULO VALOR.

10.1. Ausencia del requisito de la aceptación tácita.

Así las cosas, una vez expuestas las consideraciones anteriores, y analizando el contenido de las facturas, se encuentra que las facturas aportadas por el demandante no cumplen a cabalidad con los supuestos y requisitos exigidos por la ley que expresa el artículo 3 de la ley 1231 de 2008; pues particularmente carecen de:

- a. Nombre, identificación y firma del receptor: Numeral 2 artículo 3 de la ley 1231 de 2008 *“2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o firma de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley.”*
- b. Aceptación expresa por parte del beneficiario o comprador sobre el contenido de la factura: Artículo 2 de la ley 1231 de 2008 *“El comprador o beneficiario del servicio deberá aceptar de manera expresa el contenido de la factura, por escrito colocado en el cuerpo de la misma o en documento separado, físico o electrónico. (...)”*
- c. Requisitos para la aceptación tácita, en cuanto a que el decreto 3327 de 2009 manifiesta la inclusión en la factura original y bajo la gravedad de juramento, que operaron los presupuestos de la aceptación tácita.

En lo que respecta al literal “c” planteado en el inciso anterior, se advierte que las declaraciones bajo juramento realizadas en los documentos que se presentan como facturas respecto de la aceptación tácita fueron firmadas por el señor Marlon Díaz quien no reposa en el certificado de existencia y representación legal como representante legal, sino como suplente y las facultades de acuerdo con los estatutos, según se observa en el certificado de existencia y representación legal han estado siempre reservadas para el representante legal principal razones suficientes para concluir que los documentos aportados carecen de los requisitos relacionados con la aceptación tácita.

Es posible entonces que de parte del demandante se haya fraguado una posible inducción a error al despacho teniendo en cuenta que el Sr. Marlon Díaz firma en tales declaraciones como representante legal siendo que en realidad es representante legal suplente.

Sobre las facultades del suplente de representante legal la SuperSociedades ha sido clara al afirmar que *“Para que el representante legal suplente pueda desempeñar el cargo, se requiere, no la ausencia material del titular, sino la imposibilidad de desempeñar las funciones que le han sido asignadas, a menos que estatutariamente o por un pronunciamiento del máximo órgano social, se le hayan asignado al representante legal suplente, facultades especiales para representar a la sociedad sin necesidad de que se de la circunstancia anterior”*; es decir, que para que tales declaraciones relacionadas con la aceptación tácita sean válidas el demandante ha debido probar una de dos condiciones,

a saber: (i) que el representante legal estaba en imposibilidad de desempeñar sus funciones; o (ii) que estatutariamente se le designaron actividades que no requieren la ausencia del principal; lo cual no ha sido demostrado en el caso concreto.

10.2. Ausencia del requisito de constancia de recibo del servicio por parte del beneficiario.

La ley 1231 de 2008 en su art. 2 y el decreto 3327 de 2009 en el par. 2 del art. 4 disponen que en la factura debe constar el recibo de los servicios prestado lo cual puede hacer el comprador o beneficiario del servicio.

En el caso concreto del cual usted obra como juez de conocimiento del asunto, con un análisis minucioso su despacho podrá evidenciar que de parte del demandante en ningún momento se prestó ningún servicio. Iniciar una demanda ejecutiva y pretender mover el aparato judicial no se trata exclusivamente de emitir unos títulos valores (en este caso facturas) y presentarlos ante la jurisdicción para llevarla al error de haber prestado un servicio cuando nunca se hizo; la carga de la prueba del demandante está en demostrar que ese servicio que advierte haber prestado efectivamente lo prestó so pena que incumpla los requisitos formales del título y que el juez de conocimiento deba negar el mandamiento de pago.

En consecuencia, como lo expresa de manera perentoria la ley, las facturas no pueden obtener el carácter de título valor.

PRUEBAS

Solicito al Sr. Juez se sirva tener como pruebas las siguientes

1. DOCUMENTALES

- 1.1. Teniendo en cuenta que la sociedad demandante aporta a este proceso una certificación emitida por el entonces representante legal de la sociedad Central Regional de Medio S.A.S. aportaremos algunos documentos como reproducciones de correos electrónicos que contienen intercambios de comunicaciones en materia comercial y especialmente respecto de órdenes de compra que acreditan la forma, vía, estilo y hábitos en el que las sociedad Central Regional de Medios S.A.S. y Media Consulting Group S.A.S. se comunicaban, **en especial las órdenes de compra emitidas por Media Consulting Group S.A.S. con destino a sus cliente finales y a sus proveedores**, al momento de sus negociaciones o de la prestación de servicios lo cual evidencia la ausencia de tales parámetros en el caso que se examina y que permite concluir que no existió entre los extremos litigiosos de este proceso ningún contrato y mucho menos ningún tipo de prestación de servicios.
- 1.2. En aplicación de lo dispuesto por el art. 167 inc. 2 del Código General del Proceso al respecto de la aplicación de la carga dinámica de la prueba ordenar al demandante que aporte con destino a este proceso el documento que contiene la orden de compra o documento similar por el cual la sociedad demandada, según los términos de la demanda presenta, solicita al demandante la prestación del servicio.
- 1.3. En aplicación de lo dispuesto por el art. 167 inc. 2 del Código General del Proceso al respecto de la aplicación de la carga dinámica de la prueba ordenar al demandante que aporte con destino a este proceso el documento que prueba los términos en los que, según advierte el demandante en su demanda, fue contrato el servicio.
- 1.4. En aplicación de lo dispuesto por el art. 167 inc. 2 del Código General del Proceso al respecto de la aplicación de la carga dinámica de la prueba ordenar al demandante que aporte con destino a este proceso el documento contentivo del contrato, que según lo dicho por el demandante en su demanda, fue celebrado entre las partes.

2. DECLARACIONES

- 2.1. **De parte.** Sírvase fijar fecha y hora citando a audiencia al representante legal de la sociedad demandante Sra. Eliana Zuluaga Marín, identificada con cédula de ciudadanía número 1.094.897.925 **o quien haga sus veces al tiempo de la notificación de la providencia que decreta la prueba** para que absuelva el interrogatorio de parte que formularé en audiencia. El representante legal antes anunciado o quien haga sus veces podrá ser notificado en la Carrera 14 No. 79-78 Oficina 603 en Bogotá o al correo electrónico mediacgcolombia@gmail.com.

2.2. De terceros.

- 2.2.1. Sírvase fijar fecha y hora citando a audiencia a la Sra. Yeraldine Rocio Bernal Palacio, identificada con cédula de ciudadanía número 1.019.047.568, para que declare sobre los hechos primero, tercero, cuarto, sexto y séptimo de la demanda y su contestación previo interrogatorio que le formularé en audiencia. Al testigo puede notificarlo a la Tv. 59 No. 104 B – 86 Of. 602 en Bogotá o al correo electrónico ybernal.crm@gmail.com.
- 2.2.2. Sírvase fijar fecha y hora citando a audiencia a la Sra. Isabel Sanchez Penagos, identificada con cédula de ciudadanía número 41.774.178, para que declare sobre los hechos primero, tercero, cuarto, sexto y séptimo de la demanda y su contestación previo interrogatorio que le formularé en audiencia. Al testigo puede notificarlo a la Tv. 59 No. 104 B – 86 Of. 602 en Bogotá o al correo electrónico anaisabel.crm@gmail.com.
- 2.2.3. Sírvase fijar fecha y hora citando a audiencia a la Sra. Maria Cecilia Gomez Bula, identificada con cédula de ciudadanía número 32.740.747, para que declare sobre los hechos primero, tercero, cuarto, sexto y séptimo de la demanda y su contestación previo interrogatorio que le formularé en audiencia. Al testigo puede notificarlo a la Tv. 59 No. 104 B – 86 Of. 602 en Bogotá o al correo electrónico mcgomez.crm@gmail.com.

3. DICTAMEN PERICIAL

Sírvase decretar como prueba un dictamen pericial con intervención de perito contador sobre la contabilidad de la sociedad demandante y exhortarla a que de conformidad con lo establecido en los art. 229 y 233 del C. G. del P., y advertida sobre las consecuencias de su renuencia, brinde la colaboración al perito para que puedan elaborar su dictamen.

El dictamen tiene por finalidad determinar si en las diferentes declaraciones de impuestos de año gravable 2018, así como en la contabilidad de la sociedad demandante del año 2018 se evidencia la existencia y/o celebración de un contrato de prestación de servicios de “*publicidad exterior*” con la sociedad demandada, si existió efectivamente la prestación de este servicio y si lo que hoy pretende cobrar el demandante registra en sus cuentas por cobrar; para ello se requiere que la parte demandante preste la colaboración debida facilitando con destino a este proceso el libro auxiliar de cuentas por cobrar correspondiente al año 2018, declaración de renta del año 2018, estados financieros del año 2018, estado de resultado del año 2018, e información exógena declarada ante la DIAN por el(los) periodo(s) gravable(s) correspondiente(s) al año 2018 donde se evidencien las cuentas por cobrar del año 2018.

Que de conformidad con el art. 227 del C. G. del P. teniendo en cuenta que el término previsto es insuficiente y que para practicar el dictamen se requiere la colaboración de la parte demandante solicito que nos conceda el término para aportarlo.

4. INSPECCIÓN JUDICIAL

Solicito al señor Juez se sirva decretar como prueba una inspección judicial que le permita constatar e identificar que en el período en el cual afirma la demandante se celebró el contrato y se prestó el servicio nada de esto existió, lo anterior con la finalidad de probar la contestación a los hechos primero, tercero, quinto y sexto de la demanda.

La finalidad de la inspección judicial es que el juez pueda solicitar al representante legal y a las personas encargadas o delegadas por él la apertura de las cuentas de correo electrónico y verificar si existe con destino a la sociedad demandada algún soporte de la prestación del servicios, o si existe correo electrónico de parte de la demandada con destino a la entidad demandante de algún tipo de orden de compra o documento similar que dé prueba de la existencia del contrato, los “*términos contratados*” y/o la prestación del servicio denominado como de “*publicidad exterior*”.

5. INFORME

De conformidad con el art. 275 del C. G. del P. y bajo el entendido que la información que se presenta ante la DIAN está sometida a reserva la cual solo puede levantar en este caso un Juez de la República, comedidamente le solicito se sirva librar oficio dirigido a la **Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales** con la finalidad que allegue al despacho, y con destino a este proceso, los documentos que enseguida relaciono y que debieron ser presentados por la sociedad

demandante, esto es, MEDIA CONSULTING GROUP S.A.S., identificada con NIT número 901.097.635-1, con domicilio principal en Bogotá:

- 5.1. Declaración de renta del año 2018,
- 5.2. Información exógena declarada ante la DIAN por el(los) periodo(s) gravable(s) correspondiente(s) al año 2018 donde se evidencien las cuentas por cobrar del año 2018.

De conformidad con el art. 275 del C. G. del P. y bajo el entendido que la información que se presenta ante las Cámaras de Comercio está sometida a reserva la cual solo puede levantar en este caso un Juez de la República, comedidamente le solicito se sirva librar oficio dirigido a la **Cámara de Comercio de Bogotá** para que allegue al despacho, y con destino a este proceso, los documentos que enseguida relaciono y que debieron ser presentados por la sociedad demandante, esto es, MEDIA CONSULTING GROUP S.A.S., identificada con NIT número 901.097.635-1, con domicilio principal en Bogotá:

- 5.3. Libro auxiliar de cuentas por cobrar correspondiente al año 2018,
- 5.4. Estados financieros del año 2018,
- 5.5. Estado de resultados del año 2018.

Por todo lo anterior, solicito al señor Juez se sirva acceder a la siguiente

PETICIÓN

1. Declarar PROBADAS las excepciones propuestas.
2. Condenar al demandado al pago de costas y agencia en derecho.
3. Levantar las medidas cautelares de embargo y secuestro que hayan sido decretadas y/o practicadas hasta la fecha.

Del Señor Juez atentamente,

LUIS CARLOS FIGUEROA SAITO
C.C. No. 1.140.828.626 de Barranquilla
T.P. No. 240.456 del C.S J.